

Chillán, veintisiete de marzo de dos mil veinticinco.

Visto:

1°.- Que, comparece el abogado Claudio Vigueras Smith, defensor penal público, en representación de doña **Tamara Jazmín Vidal Vera** y deduce acción constitucional de amparo en contra de la resolución dictada el 17 de marzo de 2025 por la **Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de Concepción**, integrada por la Ministra titular doña Valentina Salvo Oviedo y las Ministras Suplentes doña Jimena Troncoso Sáez y doña Antonella Farfarello Galletti, que acogió los recursos de apelación interpuestos en causa RIT 4802-2023 del Juzgado de Garantía de Concepción y revocó la decisión de suspender temporalmente la cautelar del artículo 155 letra a) del Código Procesal Penal.

Detalla que su representada fue formalizada el 11 de enero de 2024, en la causa RIT 5357- 2023 del Juzgado de Garantía de Concepción, como autora de un delito consumado de fraude al fisco, oportunidad en que, a petición del Ministerio Público y los querellantes, y sin oposición de la defensa, se le impusieron las cautelares de las letras a), en su modalidad parcial, y d) del artículo 155 del Código Procesal Penal. La privación de libertad parcial se suspendió con fecha 3 de julio de 2024, conforme resolución pronunciada en los autos RIT 4802-2023.

Añade que el 2 de julio de 2024 la imputada fue formalizada en causa la causa RIT 4802-2023 como autora de tres delitos consumados: fraude al fisco del artículo 239, negociaciones incompatibles del artículo 240 número 1, y estafa, del artículo 467 número 2, todos del Código Penal. En tal causa se solicitó su prisión preventiva, a la que el Tribunal no accedió, estimando acreditados los presupuestos materiales de los respectivos delitos, así como las agravantes de los artículos 12 N° 7 y 260 ter y la atenuante del artículo 11 N° 6, todos del Código Penal, resolución que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Concepción, quedando la imputada sujeta a dos medidas cautelares: privación total de libertad en su domicilio y prohibición de salir del país.

Luego, en audiencia de 9 de enero de 2025 la defensa pidió sustituir la medida cautelar del artículo 155 a) en su modalidad total por la de privación parcial de libertad, argumentando que la hoy amparada y su grupo familiar se encuentran en una situación económica precaria, que ha ido en franco y profundo deterioro desde que se le impusiera la medida en comento, pues su privación de libertad le ha impedido desarrollar una labor remunerada estable. Tal petición de la defensa fue en definitiva rechazada por el Juzgado de Garantía y, una vez apelada por la defensa, la Corte de Apelaciones de Concepción la confirmó, por



mayoría de votos, por resolución de 15 de enero de 2025, pronunciada en el Rol penal 56-2025 y acumulado 57-2025.

A continuación, el 27 de enero de 2025 la defensa solicitó suspender la medida cautelar del artículo 155 letra a) los martes y viernes de cada semana entre las 08:00 y las 18:30 horas, para que la imputada pudiera desarrollar una actividad laboral y propender a la mantención de su hogar y sus hijos. Tal petición se discutió en audiencia de fecha 7 de marzo pasado y fue acogida por el Juzgado de Garantía, siendo la resolución apelada por el Ministerio Público y el querellante, Consejo de Defensa del Estado.

El 17 de marzo pasado, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, conociendo tales recursos, bajo el Rol Penal 371-2025 y acumulado 376-2025, decidió rechazar la inadmisibilidad del recurso de apelación planteado por la defensa y revocar la resolución dictada el siete de marzo de dos mil veinticinco, por el Juzgado de Garantía de Concepción, que acogió la solicitud de “suspensión” de la medida cautelar de privación de libertad total en su casa de la imputada Tamara Jazmín Vidal Vera, resolviendo que se mantiene dicha medida, en los términos en que fue decretada.

Sostiene el letrado que la resolución adoptada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, constituye un acto ilegal y arbitrario que infringe la garantía constitucional de la libertad personal consagrada en el artículo 19 numeral 7 letra b) de la Constitución Política de la República, pues, por un lado, declaró admisibles dos recursos de apelación que, a su entender, eran legalmente inadmisibles y, por otro, incumple las exigencias de fundamentación que imponen los artículos 36,122 y 143 en relación con el artículo 155, todos del Código Procesal Penal.

Respecto a la inadmisibilidad del recurso, plantea que la apelación sólo procede en los casos que señala el artículo 370 del Código Procesal Penal y como la de la letra a) a todas luces no es pertinente, se asumió que los recursos se dirigieron contra la resolución por haber esta “revocado”, conforme al artículo 149 del mismo código, la medida cautelar. Sin embargo -afirma- ello no es efectivo, pues conforme al tenor de la resolución del juez de garantía, la norma pertinente es la del artículo 156 del Código Procesal Penal, esto es, la suspensión de la medida cautelar y no su revocación. Añade que, por otro lado, la re-imposición de una medida cautelar requiere satisfacer las exigencias plasmadas en los artículos 142 y 155, esto es, solicitud del interviniente interesado y justificación -en audiencia- de los requisitos de la medida en cuestión.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XNXHXTWZXNP

Destaca que la Corte de Apelaciones no cita la normativa que hace apelable la resolución y que sostener que un permiso temporal importa siempre una revocación de la medida implica derogar de hecho el artículo 156.

En cuanto a la falta de fundamentación, alega que la resolución recurrida resulta ser ilegal pues incumple las exigencias de fundamentación que imponen los artículos 36, 122, y 143 en relación con el artículo 155, todos del Código Procesal Penal. Al efecto hace presente que el principal fundamento de la resolución del juez de garantía para acceder a la suspensión temporal de la medida cautelar fue la necesidad de brindar protección y resguardo a los hijos de la amparada, atendida la extrema precariedad económica y emocional por la que atraviesan, todo debido a la vigencia de la medida cautelar desde hace casi ya más de 8 meses. Sin embargo -reclama- de la lectura de la resolución recurrida se puede observar que ésta no se hace cargo de las razones que fundaron la decisión que decide revocar, es decir, no contiene ninguna alusión a la necesidad de brindar protección económica y mental a los hijos de la amparada y velar por su bienestar, limitándose a repetir una serie de criterios contenidos en el artículo 140 letra c) del Código Procesal Penal sin explicar de qué manera ellos justifican la decisión adoptada. Insiste en que la resolución recurrida no fundamenta, sino que sólo cita normativa y reproduce criterios, que por lo demás son meramente orientadores y no decisivos para fijar una necesidad cautelar en casos concretos.

Al referirse a la afectación de la libertad ambulatoria de su representada, señala que la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Concepción el 7 de marzo de 2025 permitía a aquella recuperar su libertad ambulatoria para el único efecto de ejercer actividades remuneradas, durante algunas horas semanales y, la decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción que ilegalmente la revocó, le privó de aquello, por lo que resulta evidente que la procedencia de la acción de amparo, conforme lo dispone el artículo 21 de la Constitución Política de la República.

Termina solicitando que se acoja la acción de amparo en favor de doña Tamara Vidal Vera, se declare ilegal la resolución de fecha 17 de marzo de 2025, pronunciada en autos 371-2025 y acumulado 376-2025, por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, que acogió los recursos de apelación interpuestos en la causa RIT 4802-2023 del Juzgado de Garantía de Concepción, y revocó la decisión de suspender temporalmente la medida cautelar del artículo 155 a) del Código Procesal Penal, y se le deje sin efecto.

2°.- Que informa la Ministra Titular doña Valentina Salvo Oviedo y las Ministras Suplentes, doña Jimena Troncoso Sáez y doña Antonella Farfarello Galletti, integrantes de la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de



Concepción, indicando que el 17 de marzo del año en curso se procedió a la vista del recurso de apelación, conocido bajo el Rol 371-2025 y acumulada 376-2025, interpuesto por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado en contra de la resolución que acogió la solicitud de suspensión parcial de la medida cautelar de arresto domiciliario, los días martes y viernes, entre 8:00 y 18:30 horas, formulada por la defensa de la imputada Tamara Jazmín Vidal Vera, por seis meses. Señalan que la sala resolvió conforme a derecho en virtud de los fundamentos dados en la resolución que transcriben íntegramente.

3°.- Que, conforme al artículo 21 de la Constitución Política de la República, el recurso de amparo tiene por objeto que todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, pueda ocurrir a la magistratura a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

4°.- Que, en la vista de esta causa, el representante del Ministerio Público planteó la incompetencia de este Tribunal de Alzada para conocer del presente recurso, pues, en su concepto, el amparo debió presentarse ante la Corte de Apelaciones de Concepción, debido a que el supuesto acto ilegal se cometió en el territorio jurisdiccional de dicha Corte y nada obsta a que otra sala de la misma conozca y falle la acción constitucional deducida por la defensa.

5°.- Que para resolver acerca de la competencia de esta Corte de Apelaciones, debe tenerse en consideración que el artículo 66 inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales prescribe que “cada sala representa a la Corte en los asuntos que conoce” y que dicha regla ha sido considerada por la Excm. Corte Suprema como una auténtica guía en el ejercicio de la competencia que corresponde a una Corte de Apelaciones y cuyos efectos apuntan directamente al tribunal y no a quienes lo integran ejerciendo la función jurisdiccional.

En otros términos, no es admisible que el mismo tribunal -a través de una conformación diversa- actúe como órgano revisor de su propia decisión, contrariando la regla del artículo 66 antes citado.

En tal sentido, el Máximo Tribunal ha señalado que el artículo 66 del Código Orgánico de Tribunales “(...) emerge como un lineamiento asociado preferentemente a la competencia objetiva, entendida como aquella que posibilita determinar el órgano jurisdiccional llamado a conocer y resolver un asunto”.

Por otro lado, el artículo 216 del Código Orgánico de Tribunales en su inciso segundo si bien establece un orden de subrogación entre Cortes de Apelaciones frente a un evento de incompetencia subjetiva total de sus miembros, lo cierto es



que igualmente tal distribución engarza sin dificultades frente a un evento de incompetencia objetiva. (SCS Rol 54.153-24).

En Consecuencia, en atención a que esta Corte es la subrogante legal de la Corte de Apelaciones de Concepción, la alegación de incompetencia efectuada por el Ministerio Público no puede ser acogida.

6°.- Que, como se dijo más arriba, el presente recurso se funda en la ilegalidad que se habría producido al dictarse la resolución de fecha 17 de marzo de 2025, por la Segunda Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, que rechaza la inadmisibilidad planteada por la defensa y revoca la resolución del Juzgado de Garantía de Concepción que suspendió por los días martes y viernes de cada semana durante seis meses la medida cautelar de privación total de libertad en el domicilio de la imputada Tamara Vidal Vera.

A juicio de la recurrente, dicha resolución es ilegal por dos motivos: porque la dictada por el Juzgado de Garantía no es apelable y porque carece de fundamentación.

7°.- Que, en cuanto a inadmisibilidad del recurso de apelación alegada por la defensa ante la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, tal pretensión fue resuelta por ese tribunal señalando que la decisión del juez de garantía de “suspender” la medida de privación de libertad total durante seis meses desde las 8:00 AM hasta las 18:30 PM los días viernes de cada semana, constituye una modificación de la medida prevista en el artículo 155 letra a) de su modalidad total a parcial, razón por la cual resulta apelable.

8°.- Que respecto de la procedencia del recurso de apelación en contra de las resoluciones dictadas por el juez de garantía, debe señalarse que conforme al artículo 370 letra b) del Código Procesal Penal, estas son apelables cuando la ley lo señale expresamente.

Por su parte, el inciso final del artículo 155 del mismo texto prescribe: “La procedencia, duración, impugnación y ejecución de estas medidas cautelares se regirán por las disposiciones aplicables a la prisión preventiva, en cuanto no se opusieren a lo previsto en este Párrafo.”

A su turno, el artículo 149 referido a los recursos relacionados con la medida de prisión preventiva establece que la resolución que ordenare, mantuviere, negare lugar o revocare la prisión preventiva es apelable cuando hubiere sido dictada en audiencia.

9°.- Que, en el presente caso, lo cierto es que la decisión del juez de garantía, en orden a autorizar la salida de la imputada desde su domicilio, dos días a la semana por diez horas y media cada día, durante seis meses, revoca la medida de privación total de libertad y la transforma en una privación parcial, lo



que, conforme a las normas referidas en el motivo precedente, hace procedente el recurso de apelación.

En tal sentido, cabe consignar que la circunstancia de que el juez haya citado en su resolución el artículo 156 del Código Procesal Penal, referido a la suspensión de temporal de las medidas cautelares, no incide en la procedencia del recurso de apelación, desde que lo determinante es el efecto que se produce con tal decisión, en la ejecución de la medida cautelar vigente, esto es, si en los hechos se produce su revocación y sustitución, como ocurre en el caso de la amparada.

En consecuencia, la decisión de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, en orden a rechazar la alegación de inadmisibilidad formulada por la defensa no es ilegal, desde que se ajusta a las normas que regulan la materia.

10°.- Que, por otra parte, con los antecedentes allegados a estos autos se puede constatar que la Segunda Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, dictó la resolución de fecha diecisiete de marzo en curso, luego de haber oído a los intervinientes, indicándose en ella los planteamientos de cada interviniente y las razones por las cuales el tribunal de alzada discrepa de lo resuelto por el juez a quo, y, en consecuencia, revoca lo resuelto por éste.

Así, en lo pertinente, luego de hacerse cargo de la alegación de inadmisibilidad, resolviendo sobre el fondo, la Corte consigna: *“(...) II.- En cuanto al fondo: 3°.- Que la representante del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado, apelaron de la resolución dictada el 07 de marzo de 2025 por el Juzgado de Garantía de Concepción, que acogió la solicitud de suspensión parcial de la medida cautelar de arresto domiciliario total, los días martes y viernes, entre las 8:00 y 18:30 horas, formulada por la defensa de la imputada Tamara Jazmín Vidal Vera, durante seis meses. Solicitan que ella sea revocada, y se mantenga la cautelar en la manera en que ella ha sido dispuesta, e incluso confirmada por esta Corte en el rol N°56-2025, el 15 de enero último. 4°.- Que, tanto el Ministerio Público cuanto el Consejo de Defensa del Estado, argumentan en torno al peligro de fuga de la imputada, al peligro para la seguridad de la sociedad y en que no han variado las circunstancias que se tuvieron en consideración cuando se decretó la medida que afecta a Vidal Vera. Por el contrario, la defensa argumenta en torno a la necesidad de obtener recursos para el sustento de sus tres hijos, cuyos padres no proveen lo necesario para su manutención, existiendo causas pendientes en los Juzgados de Familia, y además, en que en el proceso que tiene pendiente la misma imputada, tanto la querellante como el Ministerio Público se habrían conformado en su oportunidad*



con el arresto domiciliario nocturno únicamente, así como también, en que no existía peligro de fuga. 5°.- Que, en síntesis, lo que se debe resolver es el presupuesto previsto en la letra c) del artículo 140 del Código Procesal Penal, esto es, la necesidad de cautela, y al efecto se debe considerar la multiplicidad de delitos materia de la formalización, la gravedad de los mismos, el quantum de lo defraudado al Fisco de Chile, la pena asignada por la ley a estos, la circunstancia de existir otra causa vigente en contra de la misma imputada en la que también se encuentra sujeta a una medida cautelar, por delito similar, mencionada anteriormente, todo lo cual, obliga a concluir que subsisten los requisitos que autorizan la medida cautelar que le fuera impuesta en su oportunidad a la aludida imputada, esto es, la privación de libertad total en su casa, prevista en el artículo 155 letra a) del Código Procesal Penal.”

En los términos transcritos, la Corte expresa, sucintamente, pero con precisión, los motivos de hecho y de derecho en que se basa su decisión, cumpliendo con el mandato del artículo 36 del Código de enjuiciamiento.

11°.- Que, así las cosas, la resolución impugnada ha sido dictada por autoridad competente, se encuentra debidamente fundamentada, ha sido dictada dentro de las atribuciones de los Tribunales Superiores de Justicia y cumple con las formalidades legales correspondientes y, por consiguiente, no se advierte infracción a los preceptos citados por la recurrente, ni ilegalidad alguna que justifique acoger el presente recurso.

12°.- Que, finalmente, y sin perjuicio de lo señalado al resolver la alegación de incompetencia formulada por la Fiscalía, cabe consignar que resulta palmario que la acción constitucional de amparo enderezada en contra de la Corte de Apelaciones de Concepción, pretende más bien que un tribunal de la misma jerarquía efectúe un nuevo examen de cuestiones que ya han sido conocidas por los tribunales competentes y en las oportunidades procesales establecidas por el legislador.

De esta forma, no se vislumbra alguna afectación ilegal al derecho a la libertad personal reconocido en el artículo 19 número 7 de la Constitución Política de la República, lo que impone el rechazo del presente arbitrio.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 21 de la Carta Fundamental, **se rechaza** la acción constitucional de amparo interpuesta por el abogado Claudio Viguera Smith en favor de Tamara Vidal Vera, en contra de la Segunda Sala de la Il. Corte de Apelaciones de Concepción, integrada por la Ministra Titular, doña Valentina Salvo Oviedo y las Ministras Suplentes, doña Jimena Troncoso Sáez y doña Antonella Farfarello Galletti.



Regístrese, notifíquese y, ejecutoriada esta sentencia, comuníquese por la vía más expedita.

Redacción de la Ministra Erica Pezoa Gallegos.

Rol 73-2025 AMPARO.-



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XNXHTWZXNP

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Chillan integrada por Ministro Presidente Guillermo Alamiro Arcos S., Ministra Erica Livia Pezoa G. y Fiscal Judicial Gabriel Alonso Hernandez S. Chillan, veintisiete de marzo de dos mil veinticinco.

En Chillan, a veintisiete de marzo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XNXHTWZXNP